

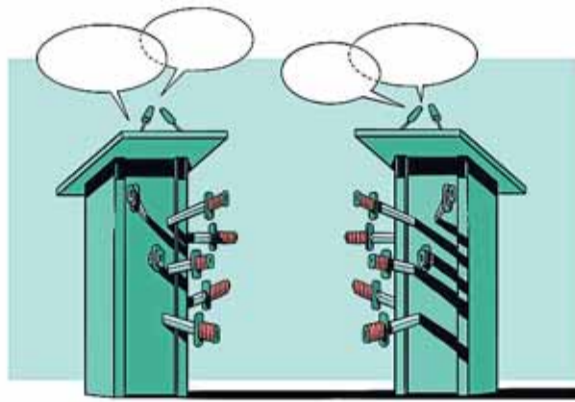
¿HACIA DÓNDE VAMOS?

Diálogo en el espacio público

XABIER RIEZU

CENTRO DE ÉTICA APLICADA DE LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO

La calidad de una democracia no se mide solo en votos, sino en la calidad de procesos de deliberación que permite



FEELIP ARIZA

No corren buenos tiempos para el diálogo. Experimentamos hoy la decepción que nos causa constatar que las transformaciones sociopolíticas y tecnológicas de las últimas décadas no van a resolver las dificultades para construir sociedades armonizadas. La nueva política resultó no ser tan nueva como esperábamos; y los 'nuevos' medios digitales son a veces una plataforma más para desatar muy viejos instintos. Se nos vuelve a imponer la reflexión sobre el diálogo y su función social para entender hacia dónde vamos y hacia dónde queremos ir.

La democracia presupone la existencia de un espacio público donde los ciudadanos y sus representantes intercambian sus puntos de vista y buscan el bien común. La calidad de una democracia no se mide solo en votos, sino en la calidad de los procesos de deliberación que permite. Pero esa impronta deliberativa de la democracia –desde el germen en la Antigüedad– requiere de unas condiciones culturales y sociales, que parecen fallar en la sociedad moderna.

Para hacernos cargo de lo que nos ocurre, vendría distinguir entre debatir y dialogar. El debate es normalmente adversarial, con dos partes que se oponen mutuamente y buscan cada una ganar; el diálogo es una práctica colaborativa, donde se trabaja conjuntamente para alcanzar un entendimiento. Esto lleva a dinámicas muy diferentes. Quienes participan en debates mediáticos sistematizan la búsqueda de puntos flacos del contrincante para rebatir sus argumentos. En el diálogo, por contra, se practica la escucha activa. Se atiende al interlocutor, no para rebatirle sino, principalmente, para comprender mejor lo que nos dice. Es por ello que, mientras en el debate prima la crítica al contrincante y jamás la reflexión sobre las propias posiciones, en el diálogo la propia posición está siempre puesta en cuestión, igual que to-

das las demás. Las consecuencias emocionales de ambas prácticas son también muy diferentes. El debate se traduce en tensión, angustia, agresividad, frustración, sentimientos que no tienen por qué aparecer en el diálogo.

Existe hoy una tendencia a considerar el espacio público primordialmente como un espacio de debate y no de diálogo. Es más, hemos terminado por pensar que el diálogo no es otra cosa que la versión más razonable del debate, donde las posiciones se manifiestan con respeto y todos los participantes asumen que es la correlación de fuerzas entre posiciones la que determinará en última instancia la legitimidad de cada cual. Pero lo cierto es que el espacio público, en general, no debe ser solo lugar de expresión y manifestación libre de opiniones y deseos, sino, ante todo, lugar de corresponsabilidad hacia lo que nos atañe en común.

¿Estamos dispuestos a ceder en nuestras posiciones, cuestionarnos a nosotros mismos en temas controvertidos o buscar puntos en común? La propia forma de plantear los temas está muchas veces en el origen de nuestras dificultades: el conflicto catalán, la memoria histórica, la educación o la eutanasia –por mencionar temas controvertidos– son debates que definimos en términos de derechos en juego. Y qué duda cabe de que afectan a derechos de las personas. Pero poner el acento en esa dimensión puede ser un obstáculo para desarrollar un diálogo prudencial que permita alcanzar acuerdos, aunque sean no concluyentes.

La realización constante de debates televisivos, sometidos en parte a

comprensibles lógicas mercantilistas y búsquedas de audiencias, consolida la tendencia a la polarización y la confrontación; y el efecto burbuja de internet, donde recibimos información y opiniones de fuentes con las que ya estamos de antemano de acuerdo, refuerza la tendencia al atrincheramiento. Y, sin embargo, sabemos por otras facetas de nuestra vida que sacar adelante proyectos exige buscar puntos en común con quienes convivimos, ceder en no pocas ocasiones y aplicar con generosidad el principio del mal menor. También lo saben nuestros representantes políticos, dedicados profesionalmente a los temas que debatimos todos en el espacio público. Lo cierto es que, para gobernar y legislar, se ven obligados a dialogar de forma constructiva, aceptar correcciones que no quisieran y rebajar las demandas que derivan de su legítimo ideario. Es más, la disponibilidad y capacidad de hacerlo deberían considerarse rasgos virtuosos en cualquiera que se dedique a una actividad cuyo objetivo central es el progreso y bienestar de todos.

Pero aquí entra en juego la redefinición del espacio público como lugar de expresión emotiva de filiaciones ideológicas o de otro tipo, que ejerce una indudable presión sobre nuestros representantes, convirtiéndolos en personas renuentes a la concesión y el compromiso. Estos últimos elementos no son entendidos ya como virtudes propias de su función, sino como males a aceptar cuando la debilidad de fuerzas obliga a ello. Si hacemos un repaso a los más destacados líderes políticos actuales, tanto a nivel internacional como cercano, no nos resultará difícil advertir la tendencia. En semejante contexto, resultan especialmente dignos de elogio los que se muestran dispuestos a pactar desde la diferencia, ceder en sus posiciones y dialogar para encontrar puntos en común. Que también de eso tenemos a nuestro alrededor.

Hemos terminado por pensar que el diálogo no es otra cosa que la versión más razonable del debate